

*Publicado por la revista "Elé", 3/1/59, N° 1734* por Salvador de la Plaza.

Con fervor nacionalista ha acogido Venezuela el Decreto de la Junta de Gobierno modificando la escala progresiva del impuesto complementario sobre la renta. Y ello, porque ha interpretado tanto las exigencias de obtener una mayor participación para la Nación en la explotación de su petróleo, como la resolución del pueblo venezolano de administrar por sí mismo sus asuntos internos, sin interferencias de tuteladas extranjeras. Esto último, por la franca y resuelta forma como fué dictado, es lo que imprime al Decreto relieve de acto de Soberanía y lo inscribe entre los sucesos de mayor trascendencia de los últimos tiempos. La agresiva actitud asumida por los voceros de los trusts petroleros, su manifiesto desacato a nuestro soberano derecho de legislar como mejor convenga a nuestros intereses, y sus amenazas de represalias, indican claramente que el Decreto no ha inquietado a esos directivos tanto por lo que a disminución inmediata de utilidades se refiere, como por lo que implica de poner término a una política de componendas y arreglos, con la cual y durante muchos años, venían burdeno a la Nación el pago de miles de millones de bolívares. El mito del 50-50% había adormecido a tal extremo la conciencia nacional, que de primer momento no fué apreciada en su justo mérito la verdadera significación reivindicativa del Decreto. Los trusts internacionales para asegurarse la extracción "pacífica" de las fabulosas ganancias a nuestros pueblos, han menester de una política con la que aparentan haberse convertido en "socios" fraternales, en protectores, en benefactores y, como consecuencia, en los mejores consejeros con los cuales debe consultarse y resolverse en forma "comercial" y "amigable" los más importantes problemas que confrontemos. La vida diaria de nuestro país está llena de ejemplos. La profusa propaganda que realizan los consorcios extranjeros por la prensa, radio y televisión, su "interés" por nuestro folklore, por nuestra "cultura", son tan manifiestos que no es necesario insistir en esos hechos. El "técnico" yanqui ha llegado a convertirse en una especie de necesidad. Sin su previa consulta, parece fuera imposible, incluso, la distribución de escritorios en una oficina para su más cómoda y eficiente operatividad. La aplicación de esa política a la distribución de los beneficios de la industria petrolera y que el Decreto ha puesto drásticamente en entredicho, se expresó en lo que vino a <sup>ser</sup> ~~practicarse~~ el inicial proyecto de reparto mitad y mitad: "El origen de esta fórmula de participación de 50-50 -explica un historiador contemporáneo- que luego se hizo famosa al ser copiada por los países árabes en que se explota el mineral, reside en que cuando bajo el gobierno del General Medina Angarita se llevó a cabo la revisión de la legislación petrolera (1943) fué entendido entre gobernantes de entonces y las empresas, que la reforma aseguraría a la Nación el mínimo de una partición por mitad". En efecto, el General Medina y sus inmediatos colaboradores, al establecer en la Ley de Hidrocarburos del 43 la obligación para las empresas concesionarias de pagar todos los impuestos que fueran creados, cualquiera que fuera su índole (Art. 46), contaban con que sincronizando esa Ley con la del Impuesto sobre la Renta, se llegaría mediante modificaciones en la escala del impuesto complementario, a aumentar progresivamente la participación de la Nación, no solo por

ra alcanzar una participación mitad y mitad, sino mayor, de acuerdo con las circunstancias que fueran imperando. En ese entonces el impuesto complementario gravaba sólo con el 9- $\frac{1}{2}$ % las utilidades mayores de los 28 millones de bolívares. Era evidente que con ese gravámen no se podía alcanzar la mitad y mitad proyectada y por ello que se iniciaran estudios para modificaciones que serían puestas en vigor en los inmediatos años. Se recordará, por otra parte, que apenas se había creado el impuesto sobre la renta, que se carecía de la organización adecuada y que existía una gran resistencia a aceptarlo por parte de los contribuyentes. No consta en documentos que el General Medina y sus colaboradores tuvieran el criterio de aceptar que el royalty o regalía, para los efectos del 50-50, se considerara como elemento de repartición y no como capital de la Nación extraño al reparto de los beneficios. El derrocamiento violento de ese gobierno obliga a no emitir juicios apresurados sobre los planes que en esa materia tuviera en mientes. Lo cierto es que ni la Constituyente elegida el 46 ni los Congresos posteriores, modificaron la Ley de Hidrocarburos, lo que es indicio irrefutable de que la consideraron justa y adaptada a las necesidades. En cuanto a la modificación de la escala del impuesto complementario, tuvo lugar en 1946, siendo aumentado a 26% el gravámen sobre rentas mayores de 28 millones de bolívares, quedando demostrado la efectividad prevista de la sincronización de las dos leyes como política elástica normativa de las relaciones de la Nación con las empresas concesionarias. Pero de 1946 en adelante, al decir de los voceros de los trusts, se llegó al arreglo por el cual no podían realizarse nuevas modificaciones en la escala sin la previa consulta con las empresas. Por otra parte, se aceptó definitivamente que el royalty fuera considerado como elemento de participación, así como otros impuestos o ingresos provenientes de las actividades petroleras, arreglo que respetó celosamente Pérez Jimenez.

Esta es a grandes rasgos la historia del 50-50, pero no de todas sus trágicas consecuencias para el país. La Ley de Hidrocarburos (Art.3) establece que el yacimiento es de la exclusiva propiedad de la Nación. Crea a favor del concesionario el derecho de explotar 83- $\frac{2}{3}$  de cada 100 barriles que sean extraídos del sub-suelo, siendo los otros 16- $\frac{2}{3}$  propiedad de la Nación. Ahora bien, al plantearse de acuerdo con lo convenido en 1943 entre gobierno y empresas, que la participación mitad y mitad se haría sobre los beneficios que produjera la manipulación de los 83- $\frac{2}{3}$  barriles de cada 100 extraídos, objeto de la concesión, independientemente de que la empresa comprara o no al Estado su royalty, el arreglo de 1946/48 interpretó de otra manera: "destinado a asegurar que en todo caso la totalidad de los impuestos de diversa índole -incluido el royalty- recibidos por la Nación equivaliese a la mitad de ganancias derivadas de la explotación petrolera" (del mismo historiador citado anteriormente).

Veamos ahora el proceso del 50-50 en cifras:

Impuestos e ingresos	1943	1947	1950	1955
	132.88	741	989	1710
Impuesto renta	19.37	290.35		

Veamos ahora el proceso del 50-50 en cifras

	1943	1947	1950	1955
Impuestos e ingresos	134,88	521,90	627,56	1.129,15
Impuesto sobre renta	19,37	290,35	385,99	685,12
Total	154,25	812,30	1.013,55	1.814,27
Utilidad de las empresas	99	744	969	1.710
Dividendos repartidos	142	249	705	1.815
Interes del capital	5,79%	23%	17,10%	25,45%

Se puede apreciar en este cuadro como van creciendo las utilidades y los dividendos, pero sobre todos los saltos de los intereses. Así también como los ingresos de la Nación marchan parejos con los dividendos, que son parte de los beneficios. Pero para conocer la verdad del reparto de beneficios tomemos el balance de 1957:

Ingresos brutos (miles de millones)	Bs.8.186,08	
Costes, gastos de operaciones		1.861,44
Royalty (adquirido a la Nación)		1.512,48
Varios impuestos		109,21
Amortización, depreciación, agotamiento de pozos		783,39
	8.186,08	4.266,52
	4.266,52	
Utilidad neta	3.919,56	
Impuesto renta	1.154,18	
Utilidad líquida	2.765,38	

Las empresas recibieron por beneficios 2.548 millones -utilidad líquida más amortización- y Venezuela solo 1.263 millones -impuesto sobre renta y varios impuestos-, la tercera parte, o lo que es lo mismo que Venezuela percibió el 31% de los beneficios, mientras las empresas el 69%, o sea que percibió 2.285 millones menos que las empresas en la participación de los beneficios en 1957. También nos demuestra este balance lo poco escrupulosos de los directivos de los trusts para inventar sus argumentos. Con el más ostentoso desprecio por nuestro pueblo, Mr Haight afirmó en sus declaraciones a la prensa: "El convenio de participación igual en los BENEFICIOS de la industria petrolera..no puede ser desconocido unilateralmente sin destruir la confianza y buen entendimiento". Por su parte la Shell: "En primer término interpretamos esta acción rápida y drástica, como un quebrantamiento del principio de igual PARTICIPACION entre la Nación y las compañías petroleras".

Los trusts son insaciables. Tanto en la formulación de sus declaraciones de renta, como en su complicada contabilidad, no pierden ocasión de burlar la imposición o de adulterar los precios a que en verdad se vende el petróleo. La existencia de <sup>muchas</sup> numerosas compañías subsidiarias que hacen aparecer como compradoras del petróleo, como contratistas de obras o transportes, etc. se convierten en múltiples riachuelos que van a engrosar las utilidades secretas que amasan en perjuicio de los intereses de la Nación. Si se realizara una eficiente fiscalización de las partidas de amortización de capital y de depreciación de equipos, se encontraría que unos mismos capitales han sido amortizados varias veces, como así también lo han sido unos mismos equipos. Otra explicación no tiene el hecho de que el porcentaje de amortización

en los años 51-57 haya sido, con ligeras variantes, de 9- $\frac{1}{2}$ % del capital neto invertido, lo que es exagerado y abusivamente alto. Las empresas hacen aparecer también una partida de amortización por agotamiento de pozos. Siendo como es el yacimiento propiedad de la Nación ¿por qué se les acepta que deduzcan en sus declaraciones de renta esa partida? Sería no terminar nunca si nos pusiéramos a señalar las múltiples violaciones a nuestras leyes con las cuales los trusts acrecen sus ganancias. El Banco Central en sus Memorias de 1957 llega a la conclusión de: "En consecuencia y como quedó dicho en nuestras memorias anteriores, la industria petrolera, a más de terminar de reponer el costo de sus capitales fijos, amortizó en su conjunto para 1954 todas las inversiones netas de capitales realizadas hasta aquel año". Mientras los trusts han amortizado varias veces su inicial capital invertido, el nuestro, el petróleo, que no es renovable ha sido extraído para enriquecer a accionistas que viven a cientos de kilómetros de nuestro país. Por demás está justificada la reivindicación del pueblo venezolano de obtener una mayor participación en la explotación de su petróleo.

Es cierto que no debe preocuparnos exclusivamente el aumento de la imposición fiscal y debe ser objetivo a realizar de inmediato, la creación de una verdadera industria nacional del petróleo. Pero también lo es, que la industria nacional no debe servir de pretexto para propiciar una política de mangas anchas con las empresas concesionarias. Debemos abogar por una política petrolera que persiga al mismo tiempo que el aprovechamiento al máximo, para beneficio de la colectividad, de la extracción del petróleo, su conservación, a fin de que también disfruten de él las generaciones futuras. Política que por el hecho de estar en manos de trusts extranjeros la extracción, refino y distribución tenemos que enfocarla en dos vías de realización, independientes entre sí, pero unidas por el objetivo general.

1.- Política de relaciones del Estado con las empresas concesionarias, basada en la más estricta vigilancia y control por el Estado de todas las operaciones de la industria y en la regulación de la participación en los beneficios por medio de la Ley de Impuesto sobre la Renta. No solo se debe perseguir una mayor participación, sino que la extracción se efectúe sin perjuicio de la conservación de los yacimientos. La Ley de Hidrocarburos debe ser mejorada en el sentido de ampliar los sistemas de control. Respecto a la participación, con modificaciones en la escala progresiva del complementario, debe alcanzarse un límite que técnicamente no afecte el desarrollo normal de las empresas. Un 75% en los beneficios, sin incluir el royalty, debe ser una meta para el futuro inmediato. Mientras más alta sea nuestra participación, menos riesgos corre nuestra economía por variaciones de precios o de ofertas en el mercado. Es cierto que los países del Medio Oriente poseen yacimientos de magnitudes fantásticas, pero también lo es que el petróleo no se reproduce, que su consumo aumenta en forma cada vez mayor debido a que a más de fuente de energía, es rico en derivados que tienen aplicaciones numerosas en la industria. El agotamiento de los yacimientos de E.U.U. y la incorporación de millones de hombres en Asia, Africa y en nuestra América a la vida productiva, hacen prever que el mercado mundial no padecerá de crisis por abundancia de petróleo, sino por escasez. Cada país poseedor de yacimientos desarrolla una política de conservarlo el mayor tiempo posible, ante la

evidencia de su agotamiento inexorable.

2.- Industria Nacional del petróleo: La demostración más evidente de como ha deformado nuestra economía la dependencia en todos sentidos en que nos mantenidos los trusts petroleros, es que hasta ahora, no obstante ser el segundo país productor de petróleo en el mundo, no contamos con nuestra propia industria petrolera. Ni extraemos ni refinamos, incluso, para suplir el abastecimiento interno de derivados, tenemos que adquirirlos a los trusts. Apenas si este año comenzó a funcionar la Refinería Experimental de la Petroquímica, con capacidad para 2.000 barriles diarios. Un proyecto de refinería de gran capacidad, 60.000 barriles diarios, debidamente y técnicamente elaborado, no se ha podido realizar por la oposición encubierta de los trusts. Hemos dispuesto de recursos que se han malversado en teleféricos, hoteles, etc; contamos con personal técnico para la extracción, transporte, refinación del petróleo, para las labores administrativas, pero ni hemos sabido emplear los fondos ni aprovechar esas capacidades.

No se trata de aumentar nuestros ingresos solamente, de lo que se trata es de reconquistar nuestra independencia y de proceder con nuestros propios medios a crear y defender nuestra industria petrolera. Por resolución del próximo Congreso debe quedar establecido de una vez por todas que no se otorgarán nuevas concesiones -ni de petróleo ni de hierro-; que los yacimientos y depósitos que nos quedan deben ser explotados directamente por nosotros mismos y para beneficio de la colectividad venezolana. Debe procederse a extraer directamente de las reservas nacionales antes de que por drenaje sean bombeados esos depósitos por los concesionarios colindantes. Debemos concurrir al mercado internacional con nuestros crudos, para venderlos o para usarlos en trueque para adquirir maquinarias o materias primas que requiera a nuestro desarrollo industrial. La Refinería de gran capacidad debe ser instalada para atender al abastecimiento interno de derivados, mercado que debe ser reservado en monopolio al Estado como garantía ~~de~~ para nuestras industrias y transportes.

Tanto la producción de los concesionarios, como la de la Industria Nacional, debe ser limitada ~~en~~ a un tope que tome en cuenta el desarrollo de nuestra economía y la necesidad de conservar el petróleo para no depender dentro de pocos años de otros países productores. Ese tope puede ser 2.000.000 de barriles diarios, habida cuenta de que la participación en los beneficios de las empresas ~~será~~ elevada al 75%, suministrará suficientes recursos para que bien administrados y sin los despilfarros a que nos han habituado los trusts, aseguren un amplio desarrollo económico.

El Decreto de la Junta de Gobierno no solo ha actualizado todos los problemas relativos al petróleo, sino que ha infundido optimismo general en las grandes posibilidades que tenemos para desarrollar, por nosotros mismos, una política independiente de defensa nacionalista de nuestros derechos. Este Decreto debe contribuir y está en todos la posibilidad de lograrlo, a desencadenar en todo el país las fuerzas contenidas del más sano y constructivo nacionalismo. Los trusts continuarán amenazando, pero al demostrarles que estamos dispuestos a sostenernos firmes en nuestros propósitos, no les quedará otro recurso que bajar la guardia.



Contra los pesimistas pronosticadores de desastres, agentes encubiertos de los trusts, presentemos la firme resolución de seguir adelante por una Venezuela libre y soberana; dispuesta a aprovechar sus recursos naturales para beneficio de todos los venezolanos, resuelta a no dejarse esquilmar más por los trusts internacionales.